



Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

**Sentencia Definitiva**

**Expediente N° 51334/2023**

**AUTOS: “ASOCIACION ARGENTINA DE DIETISTAS Y NUTRICIONISTAS  
DIETISTAS c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS  
s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los, , reunida la Sala Segunda de la  
Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos,  
se procede a votar en el siguiente orden:

**EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO:**

Llegan las presentes actuaciones ante esta Sala en virtud del recurso de apelación  
interpuesto por la parte actora contra la resolución n°2023-154-E-AFIP-DEIM-SDGTLSS  
dictada por el Departamento de Impugnaciones y Recursos de la Dirección General de los  
Recursos de la Seguridad Social. Mediante el acto recurrido se desestimó la impugnación  
intentada respecto de la determinación de deuda por los periodos 01/2018 a 12/2018, ambos  
inclusive, en virtud de haberse detectado una diferencia en las contribuciones patronales  
por un total de \$ 585.702,91, de los cuales \$ 159.010,79 corresponden a capital, \$  
332.524,19 a intereses y \$ 94.368 en concepto de multa por la infracción a art. 14 cap. g  
R.G. A.F.I.P. n° 1566.

Cabe señalar que las presentes actuaciones tuvieron origen en el marco de una  
investigación denominada “Micro empleo con ventas superiores al tope” donde se detectó  
que la asociación apelante superó el tope de facturación máxima inmediato anterior (2017)  
-requisito establecido en decreto 1714/2014 (B.O 1/10/14)- para ser acreedor de los  
beneficios previstos en el título II del capítulo I de la ley 26.940, por lo que se determinó  
una deuda por la utilización del beneficio de reducción de alícuotas de contribuciones  
previstas 01/2018 a 12/2018.

La recurrente cuestiona la resolución, sostiene que el procedimiento es nulo, en  
primer término, relata que el trámite dado al expediente no fue el correcto lo que importó  
omitir una instancia revisora administrativa. Por otro lado, señala que el acto administrativo  
recurrido carece de los requisitos esenciales para considerarlo valido al estar ausente la  
motivación del mismo. También remarca la calidad de la entidad que representa, y que la  
misma tampoco fue analizada por el organismo recaudador. En cuanto al tope de





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

facturación bruta total anual neta de impuesto de \$ 2.400.000 establecido en el decreto 1714/2014, considera que se trata de un error de concepto, en atención a que la Asociación de Dietistas y Nutricionistas Dietistas se nutre de fondos provenientes de cuotas de asociados, convenios científicos, aranceles por cursos y recursos por eventos y jornadas, todos ellos destinados principalmente al cumplimiento del objeto social de la asociación. Por todo ello entiende que la determinación de deuda carece de causa o motivación. Posteriormente, efectúa un minucioso análisis de la naturaleza jurídica de estos regímenes sancionatorios, al que nos remitimos en honor a la brevedad (Ver. recurso de apelación obrante en actuaciones digitales).

A su vez, señala la ausencia de tipicidad y el exceso reglamentario del art. 16 de la RG (AFIP) 1566 capitulo H) texto sustituido por RG 2766/2010, ante una clara ampliación de características de la figura del tipo penal. Por otra parte, remarca que los inspectores actuantes carecen de facultades para ingresar en el análisis jurídico de la conducta del contribuyente, lo que trae como consecuencia la nulidad específica del acta de infracción.

Para concluir, solicita que se lo exima del requisito previsto por el art. 15 de la Ley 18.820 y 26 de la Ley 24.463 por cuanto considera que su observancia importa un ataque al derecho de propiedad y un adelantamiento de la condena, subsidiariamente solicita se declare su inconstitucionalidad.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, con el objeto de acreditar el compromiso de su representado, ofrece seguro de caución a fin de dar cumplimiento con la exigencia del depósito previo de las sumas cuestionadas y acompaña como garantía una póliza de seguro de caución emitida por la empresa “Aseguradores de Caucciones S.A. Compañía de Seguros” (V. expte adm digital Expte. Nro. 20022-67-2022-3. ASOC DE DIETISTAS.pdf) a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la suma de \$ 585.702,91, en cumplimiento del requisito que impone el art. 15 de la ley 18.820 (modif. por ley 23.473).

### I. Admisibilidad formal.

Ahora bien, en este supuesto particular entiendo que el seguro de caución resulta suficiente para tener por acreditada la exigencia de pago del depósito previo y con ello, la habilitación de la instancia judicial. En igual sentido se ha expedido el Alto Tribunal de la Nación en cuanto a que el principio “solve et repete” tiene por finalidad asegurar el cobro de los montos determinados como deuda del organismo recaudador y evitar que el contribuyente se insolvente, extremos que en el caso se verificaron con la póliza de caución presentada como garantía del interés fiscal (Fallos: 331:2480).

### II. Análisis de la cuestión.

---

Fecha de firma: 30/09/2024

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#38443157#401036183#20240920102241844



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

En principio, cabe indicar que los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo aquellas que se estimen decisivas para la correcta solución del litigio y el fundamento de sus conclusiones” (CS, nov. 4/97 “Wiater c/ Min. de Economía”, La Ley, 1998-A, 281 y Fallos: 272:225; entre muchos otros).

En virtud de ello, se procederá a dar tratamiento al agravio que entiendo sella la suerte del reclamo, por lo que devendrá abstracto el análisis de los restantes.

En cuanto a las actas de inspección e infracción atacadas así como la resolución administrativa de fecha 5/1/23 que no hace lugar al recurso de revisión interpuesto por la asociación imputada, entiendo que asiste razón al apelante en torno a la falta de una adecuada motivación de las mismas, recordemos que los requisitos de causa y motivación del acto administrativo -sin perjuicio de los restantes- se apoyan en la máxima republicana que sostiene a nuestro sistema de gobierno, constituyen una interdicción a la eventual arbitrariedad administrativa y, además, representan una garantía para que el particular pueda ejercer en forma plena la defensa de sus derechos e intereses (V. Voto del juez Rosatti. Fallos: 344:1013).

Con lo cual, el hecho de limitarse a indicar que se superó el tope de facturación bruta total anual neta de impuesto, hecho este que excluiría a la asociación respecto de la utilización de los beneficios otorgados por la ley 26940/2014 durante el año 2018, sin hacer un pormenorizado análisis de la composición de esa facturación bruta denunciada en atención a la calidad de asociación sin fines de lucro que posee la apelante y el posible destino de parte de ella al cumplimiento de su objeto social. En tal orden de ideas no se escapa a la atención de este magistrado que ese tope de \$ 2.400.000 previsto por la reglamentación tampoco ha ido evolucionado conforme lo impone el propio artículo 18 punto 3 del decreto reglamentario 1714/2014 de la ley 26.940 de PROMOCION DEL TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCION DEL FRAUDE LABORAL, en tanto la propia norma dispuso que el mecanismo de actualización de dicho monto sería determinado en el marco de la actuación de un comité de seguimiento del régimen permanente de contribuciones de la Seguridad Social y el régimen de promoción de la contratación de trabajo registrado creado por el art. 40 del decreto 1714/2014.

Tal extremo legal, hasta el momento de la determinación de deuda de la Asociación apelante no tuvo lugar, es decir que la debida conformación del comité nunca ocurrió con anterioridad al hecho que motivara la sustanciación de las presentes actuaciones. Por lo que no se puede soslayar que el propio organismo controlante está incumpliendo un deber legal, en tanto expresamente se encuentra previsto en el art. 41 del decreto 1714/2014 (B.O 1/10/14) que una de las funciones del referido comité de seguimiento es la de “...Evaluar y

Fecha de firma: 30/09/2024

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#38443157#401036183#20240920102241844



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

revisar los límites establecidos en el monto de facturación previsto en el artículo 18 de la Ley N° 26.940...”

Con este cuadro fáctico, es fácil discernir que se ha mensurado una facturación neta anual del año 2017 con un tope dispuesto en el año 2014, y el cual debió –como se mencionó anteriormente- ser previamente actualizado por el comité creado para tal fin.

Es por ello, que no puedo convalidar el accionar administrativo ante este cúmulo de inconsistencias que advierto no solo en el acto administrativo que se intenta impugnar sino también en la abstención de una actuación que constituye un deber legal por parte de uno de los organismos del Estado (Ver. art. 18 punto 3 Dto. 1714/14).

Si bien es cierto que no existen formas rígidas para el cumplimiento de la exigencia de la motivación del acto administrativo, la cual debe adecuarse -en cuanto a la modalidad de su configuración- a la índole particular de cada acto, no pueden admitirse fórmulas carentes de contenido, expresiones de manifiesta generalidad, o en su caso, circunscribirse a la mención de citas legales -que contemplan sólo una potestad genérica no justificada en los actos concretos-, pues tal interpretación equivaldría a prescindir de ese recaudo esencial cuya observancia es determinante para la validez del acto de que se trate. (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite - Fallos: 344:3573).

Por ello entiendo que, en resguardo de los principios, derechos y garantías constitucionales, las decisiones que adopta la administración se encuentran sujetas -como recaudo de validez- a la observancia de los requisitos esenciales previstos en los artículos 7° y 8° de la ley 19.549; de este modo, y en lo que aquí respecta, el acto administrativo debe contar con una causa y en el derecho aplicable: entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que sustentan la decisión (artículo 7°, inciso b), lo que significa que no se puede aplicar solo parcialmente el artículo 18 punto 3 del decreto 1714/2014, sin siquiera mencionar los motivos por los que el tope de facturación allí previstos jamás fueron actualizados cuando a renglón seguido de ese mismo párrafo, le impone una manda a un comité para su correcta actualización y de este modo –según entiendo- evitar caer en una desnaturalización de la finalidad que tuvo la norma que se reglamenta, me refiero puntualmente al fomento de la Promoción del Trabajo Registrado para Microempleadores, a quienes les concedió una serie de reducciones contributivas con esta finalidad.

Este hipotético incumplimiento –que finalmente se hizo efectivo- ya había sido considerado al momento de debatir la ley 26.940 lo que fácilmente se puede advertir de la atenta lectura del DIARIO DE SESIONES de la CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 6ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) MAYO 21 DE 2014 PERÍODO 132º, en el Dictamen de minoría de los Sres. Víctor N. De Gennaro. y Claudio

Fecha de firma: 30/09/2024

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#38443157#401036183#20240920102241844



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

R. Lozano, este cuestionamiento de dejar en manos de la reglamentación la determinación de del monto de facturación máxima, en los siguientes términos: “...d) *Por otra parte, ni siquiera el criterio dispuesto por el proyecto de ley para efectuar una discriminación entre las firmas de menor tamaño con respecto a las más grandes resulta suficiente ya que si bien el régimen permanente para las microempresas hace mención acerca de **plantear un monto de facturación máxima, lo deja a criterio de la reglamentación futura excluyéndola del debate parlamentario...***” (el resaltado me pertenece).

Por otro lado, también es interesante la intervención del Sr. Martínez en el debate correspondiente a la cámara de senadores de esta ley, en donde manifestó que: “... *queremos dejar presente y sentado como oposición que consideramos que este beneficio de los cinco sea en forma permanente para las empresas hasta siete empleados, como se establece, y aquellos que no excedan la facturación y queden dentro de lo que es el régimen de las pymes. Al respecto, hay una ley muy clara vinculada con las pymes, que establece cuál es la facturación que una empresa debe tener para mantenerse como pyme y para obtener los beneficios que ofrecen los distintos regímenes de promoción. Entonces, este es uno de los planteos en los que tenemos diferencias, y queríamos hacerlo...*” (Ver D I A R I O D E S E S I O N E S - CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 6ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN ORDINARIA -30 DE ABRIL DE 2014). (el resaltado me pertenece).

A modo de obiter dictum, cabe recordar sobre este último punto que esta sala se ha pronunciado en causas de análogas características y ante la falta de obrar administrativo que evidencie un estricto ajuste a pautas que observen el principio de realidad económica, respecto a ello, cabe recordar la numerosa litigiosidad que ha generado la aplicación de la alícuota establecida en el inciso b) del art. 2 del decreto 814/01 respecto de los topes de facturación para las PYMES (promedio de las ventas fijado \$48.000.000), cuestión ya resuelta favorablemente por la totalidad de las salas de esta cámara, (ver Sala I Expte. 99680/2012/1/RH1 “Cooperativa Eléctrica Lujanense Ltda c/ Administración Federal de Ingresos Públicos”, Sala II Expte. 19649/2020 “Guardian SRL c/ AFIP S/ Impugnación de Deuda” sentencia del 14/11/2022, Sala III SD.125.281 del 11/05/09 “Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2, y el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reiteradamente ha dejado firme esta postura por aplicación sistemática del art. 280 C.P.C.C.N, ver Expte CSS 93739/2011/1/RH1 y Otros SOS SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos” sentencia del 12 de diciembre de 2017, entre otros).

Fecha de firma: 30/09/2024

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#38443157#401036183#20240920102241844



## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

A mayor abundamiento, también cabe señalar que la realidad económica y la situación del empleo en estructuras pequeñas que no excedan la cantidad de cinco trabajadores también ha sido recientemente consideradas en el decreto 70/2023 en su art. 96 a fin de poder llevar adelante emprendimientos productivos.

Por todo lo expuesto y a modo de colofón cabe recordar que la tarea del ente administrador no trata de cumplir con un ritualismo procedimental, sino de satisfacer el orden público para arribar a la verdad material, mediante el aseguramiento del derecho de defensa del interesado. Aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (ver Hutchinson, Tomás; " Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549 ", pág. 29 y ss.).

Por las consideraciones efectuadas, propicio se declare la nulidad del procedimiento incoado y de las resoluciones dictadas en su consecuencia.

#### III. Costas y Honorarios

En atención a las particularidades del caso y el modo en que se decide, habré de disponer la imposición de costas por su orden (conf. art. 68 2do párrafo del C.P.C.C.N.)

Con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del C.P.C.C.N., cabe tener presente que la ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderada por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:302:534 y sus citas; 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en la cantidad de 3 UMA, cifra equivalente a la suma de \$182.337 (pesos ciento ochenta y dos mil trescientos treinta y siete), conforme Acordada de la C.S.J.N. N° 32/2024, Res. SGA N° 2375/2024 del 12/09/2024 y art. 19 de la ley 27.423. Al monto establecido deberá adicionársele el IVA en caso de corresponder (cfr. Compañía General de Combustible SA s/ Recurso de Apelación" sent. del 16/06/93; Fallos: 316:1533). Respecto a los honorarios de la parte demandada, deberá estarse a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 27.423.

Fecha de firma: 30/09/2024

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#38443157#401036183#20240920102241844





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Por las consideraciones expuestas, de prosperar mi voto corresponde: 1) Hacer lugar a la admisibilidad del recurso; 2) Declarar la nulidad del procedimiento incoado y de las resoluciones dictadas en su consecuencia; 3) Imponer las costas por su orden (conf. art. 68 2do párrafo del CPCCN); 4) Regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora por su actuación en la Alzada en la cantidad de 3 UMA, cifra equivalente a la suma de \$182.337 (pesos ciento ochenta y dos mil trescientos treinta y siete), conforme Acordada de la C.S.J.N. N° 32/2024, Res. SGA N° 2375/2024 del 12/09/2024 y art. 19 de la ley 27.423. Al monto establecido deberá adicionársele el IVA en caso de corresponder (cfr. Compañía General de Combustible SA s/ Recurso de Apelación" sent. del 16/06/93; Fallos: 316:1533). Respecto a los honorarios de la parte demandada, deberá estarse a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 27.423.

### **EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:**

No comparto la solución propiciada por mi distinguido colega de Sala.

La Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas impugna la Resolución de AFIP 154-E-2023 en cuanto le reclama una deuda de \$ 585.702,91 (comprensivo de \$159.010,79 por capital, \$332.524,19 en concepto de intereses y \$94.368 por multa ante presunta comisión de infracción prevista por el art. 14 de la R.G. 1566 t.o. 2010) por diferencias en el pago de contribuciones durante el periodo enero a diciembre de 2018. Entiende el organismo que la empresa se habría beneficiado al hacer una aplicación indebida del beneficio otorgado por la ley 26.940 a pesar que su facturación superaba el límite admitido por la reglamentación para su concesión.

La apelante plantea la nulidad del proceso administrativo por haberse basado en una directiva -resolución 3739/2015- que no le sería aplicable, ya que en verdad el procedimiento a seguir es el que establece la Resolución General de AFIP 79/98, siendo inadmisibles que la Administración elija discrecionalmente el procedimiento a seguir en base a suposiciones antojadizas, violentando de esta manera el art. 1º de la ley 19.549 y determinando la presunta deuda en base a actas de inspección que no pueden tener contenido vinculante.

A lo expuesto, debe añadirse que, según su tesis, no existe hecho punible dado que la suma determinada como facturación máxima no fue objeto de reajuste desde el momento de la sanción de las normas legales que se consideran violentadas, esto es la ley 26.940 y su decreto reglamentario N° 1.714/14.

Desde el punto de vista procesal entiendo que el recurso debe ser estudiado ya que, en el caso, se acompañó seguro de caución lo que legitimaría una revisión judicial de lo

Fecha de firma: 30/09/2024

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#38443157#401036183#20240920102241844



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

actuado en sede administrativa por imperio de los arts. 17, 18 y 109 de nuestra Carta Magna (ver CSJN 04/11/08, “Orígenes AFJP SA c/ AFIP —DGI”, Fallos 331:2480).

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento, los agravios vertidos en cuanto atacan la validez y legitimidad del proceso administrativo cumplido, no pueden ser receptados.

El principio que impera en la materia es la de autodeterminación del tributo y de las cotizaciones adeudadas al Estado por parte del deudor que, en el caso, es una entidad que actúa como agente de retención de aportes y contribuciones al sistema previsional autorizando, en consecuencia, la actuación de la AFIP que, en nuestro medio goza de amplias funciones de control y fiscalización sobre los justiciables (arts. 33 y 35 de la ley 11.683) y que, en el caso, fueron ejercitadas a través de un procedimiento regular que aseguró el derecho de defensa en juicio de la empresa impugnante.

Ello es así pues la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas interpuso recurso de impugnación contra las actas de inspección e infracción labradas, fue oído en sede administrativa, emitiéndose el dictamen correspondiente de fecha 28/12/22, lo que llevó al dictado de una resolución fundada que se cuestiona ante esta instancia judicial.

En otras palabras, se han respetado los lineamientos de los arts. 17 y 18 de nuestra Carta Magna en concordancia con la reglamentación impuesta por el art. 14 de la ley 19.549.

Cabe señalar que sólo puede conceptualizarse como nulos los actos jurídicos en los que la voluntad administrativa resulte excluida por error esencial o dolo, se apoye en hechos o antecedentes inexistentes o falsos, se haya ejercido violencia física o moral sobre el agente, medie simulación absoluta, se apoye en hechos falsos o se haya violentado la ley aplicable siendo que, en el sub-lite, lo único que se discute es si la entidad apelante pudo válidamente, por imperio de la ley 26.940, cotizar sumas inferiores a las aplicables para la generalidad de las empresas.

En este aspecto, lo actuado en sede administrativa no resulta violatorio de lo dispuesto por el art. 7º de la ley 19.549 ya que, no puede desconocerse, en un estado de Derecho, la posibilidad que el Poder Administrativo ejerza funciones de control y fiscalización sobre la actividad productiva con el fin de verificar el cumplimiento de las normas vigentes. Se ha señalado, al respecto, que las facultades de la policía del trabajo no se reducen a la actividad de comprobación, sino que, por el contrario, es más amplia, comprendiendo acciones de prevención, de investigación y de aplicación de sanciones (Pirolo, Miguel A., “Derecho del Trabajo Comentado” Tº IV pág. 846 edit. La Ley; Vázquez Vialard, Antonio, “Naturaleza y caracteres de la función que desarrolla la Administración Laboral” LT, Tº XX pág. 957/965).







Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

En el caso, fueron respetadas las normas reglamentarias, labrando las actas correspondientes a tenor de lo dispuesto por los arts. 33 y 35 de la ley 11.683, constituyendo dichos documentos actos preparatorios para un futuro proceso administrativo cuyos lineamientos han sido respetados.

Sin perjuicio de lo anterior, entiendo que la decisión administrativa debe ser dejada sin efecto por no existir base fáctica para reclamar diferencias por cotizaciones impagas y aplicar una sanción punitiva a la empresa emplazada.

Ello por cuanto el art. 18 inc. 4º, de la ley 26.940 encomendó a un organismo administrativo -Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad- actualizar el monto base de \$ 2.400.000- para determinar si los empleadores podían, en períodos posteriores, seguir beneficiándose con el régimen que nos ocupa.

Dicha entidad incumplió la manda legal y no puedo soslayar que la ley 26.940 y su decreto reglamentario datan del año 2014 y, en consecuencia, se han aplicado puniciones pecuniarias por una facturación empresaria que supera los \$ 2.400.000 pero en el año 2.018, lo que traduce un ejercicio, al menos excesivo de la potestad de control.

Para que el Fisco pudiera legítimamente reclamar una deuda previsional a la impugnante y aplicar una punición patrimonial por haber cotizado sumas inferiores a las adeudadas al sistema previsional previamente debió actualizar el monto de \$ 2.400.000 mediante algún índice razonable desde el 2014 al 2018 y luego determinar si, efectivamente, podía considerarse a la apelante deudora de diferencias por cotizaciones al sistema de seguridad social.

Leyes como la 26.940 han sido sancionadas para favorecer la actuación de los micro empleadores y la contratación de personal conforme normativa laboral y, por ende, no deberían ser proyectadas por el propio Estado en contra de la finalidad tenida en cuenta por el legislador al momento de su dictado.

En virtud de lo expuesto propongo: 1º) Declarar habilitada la presente instancia judicial, 2º) Revocar la resolución impugnada, 3º) Imponer las costas del litigio por su orden en atención a la índole de la cuestión litigiosa (art. 68 2do. párrafo CPCCN).

**LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:**

Adhiero a la propuesta del Dr. Walter F. Carnota.

En mérito de lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal **RESUELVE:** 1º) Declarar habilitada la presente instancia judicial, 2º) Revocar la resolución impugnada, 3º) Imponer las costas del litigio por su orden en atención a la índole de la cuestión litigiosa (art. 68 2do. párrafo CPCCN).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

WALTER FABIAN CARNOTA

Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE

Juez de Cámara

ANTE MÍ: AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara

JSM

